

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE	: MARÍA CECILIA RENDON ROJAS
DEMANDADO :	: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-018-2019-00386-01
RADICADO INTERNO	: 141-20
DECISIÓN	: ADICIONA, REVOCA PARCIALMENTE Y CONFIRMA
ACTA NÚMERO	: 006

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con el **Decreto 806 de 2020**: “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

De conformidad con el poder especial otorgado por la Dra. SILVIA LUCÍA REYES ACEVEDO (en calidad de representante legal de la sociedad PORVENIR S.A.), a la sociedad GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.; y el certificado de existencia y representación de la sociedad en mención, en el que se certifica que “Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 25 de septiembre de 2020, registrado el 25 de septiembre de 2020 bajo el número 02619669 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es): ... **Pérez Restrepo Ana Gabriela**”, por cumplirse los requisitos establecidos en los artículos 74 y 75 del CGP se le reconoce personería.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se DECLARE la nulidad o ineficacia del traslado o de la vinculación al Régimen de Ahorro Individual que realizó el 18 de agosto de 1998, por el incumplimiento, la omisión y la falta al deber de información profesional y del buen consejo; declarar la nulidad o ineficacia de la voluntad de la accionante, que dio lugar al traslado o vinculación al Régimen de Ahorro Individual, por existir un vicio del consentimiento denominado error; que la accionante siempre ha estado vinculada válidamente al Régimen de Prima Media. Se CONDENE a la sociedad PORVENIR S.A. a trasladar a Colpensiones, la totalidad de los aportes económicos de pensión obligatoria que reposan en la cuenta de ahorro individual, con todos sus rendimientos e intereses financieros, incluyendo el porcentaje aportado al Fondo de Garantía

de Pensión Mínima. CONDENAR a Colpensiones a recibir los conceptos anteriores. Y se impongan costas procesales a las accionadas.

Como supuestos facticos con que sustenta sus pretensiones, narra que nació el 19 de diciembre de 1960; se afilió al ISS desde el 12 de febrero de 1980; se trasladó a la sociedad PORVENIR S.A. el 18 de agosto de 1998 sin que mediara una asesoría e información adecuada, íntegra, suficiente, clara, oportuna y cierta sobre los efectos jurídicos de su traslado.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 22 de septiembre de 2020, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ la ineficacia del traslado de la demandante al Régimen de Ahorro Individual, administrado por las sociedades PORVENIR S.A.. Le ORDENÓ a la sociedad PORVENIR S.A. a efectuar el traslado inmediato a Colpensiones, de todos los valores que hubiera recibido con motivo de su afiliación como cotizaciones, bonos pensionales, los rendimientos que se hubieran causados, sumas adicionales de las aseguradoras y cuotas de administración. Le ORDENÓ a Colpensiones a reactivar la afiliación de la demandante, a recibir las sumas indicadas y continuar como su administradora de pensiones. E impuso costas a PORVENIR S.A. y sin costas a Colpensiones.

IMPUGNACIÓN

Por su parte interpone recurso de apelación el **apoderado de la sociedad PORVENIR S.A.** donde solicita se revoque la sentencia en su integridad, argumentando frente a la declaratoria de la ineficacia de la afiliación, que su representada cumplió con el deber de información exigido al momento de realizar el traslado en el art. 97 del Decreto 663 de 1993, al entregarle información en 1998 de las condiciones y funcionamiento del Régimen de Ahorro Individual, las cuales no se entregaron solo en el formulario de afiliación sino también verbalmente y en diferentes momentos, lo cual se corrobora al haber mencionado la accionante que recibió comunicación, extractos por PORVENIR S.A., y tuvo reuniones particulares con los asesores; que la información del formulario de afiliación es la prevista en el art. 11 del Decreto 692 de 1994 y la accionada ha hecho campañas masivas y comunicados de publicidad. Frente a la prueba de la información entregada en forma escrita, sostiene que solo surgió con la obligación contenida en la Circular 016 de 2016, pero la información se entregó verbalmente y eso se pudo probar en el interrogatorio. Considera que no se pueden hablar de negaciones indefinidas de la falta de explicación de las características del Régimen de Ahorro Individual y del Régimen de Prima Media, ni la información de cómo se pensionaban en uno y otro régimen, porque estas condiciones están consagradas en la Ley 100 de 1993, por lo que en aplicación del art. 9 del Código Civil, la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Igualmente se opone al traslado de los gastos de administración y suma adicionales, porque estos están consagrados en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, y se destinan exclusivamente a la administradora de pensiones sino también la Fondo de Garantía de Pensión Mínima y los seguros previsionales, y resalta frente a los últimos, que se han venido prestando por la aseguradora. Frente a las restituciones mutuas del art. 1746 del Código Civil, considera que, si el demandante no puede devolver el cubrimiento realizado por los seguros previsionales, no se debe realizar el traslado de los rendimientos financieros y lo consignado en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, porque se estaría generando un enriquecimiento sin justa causa para el sistema. Solicita se tenga en cuenta la sostenibilidad financiera del sistema confirme se ha pronunciado la Superintendencia Financiera en el concepto de enero de 2020 y el Tribunal Superior de Medellín en la sentencia del 14 de agosto de 2019, cuando negó la ineficacia del traslado de las personas pensionadas.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la demandante, solicita se confirme la sentencia de conformidad con lo expuesto en la demanda y en concordancia con los arts. 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 y las sentencias SL 1452, SL 1688, SL 1689, SL 4360 y SL 4426 de 2019, al estar probado que el traslado del régimen de la demandante fue inducida por una información imprecisa e incomprensible que suministro el asesor del PORVENIR S.A., faltando él debe de información y buen consejo del fondo privado; así mismo porque el Fondo PORVENIR S.A. no acreditó que actuó de manera responsable, diligente y objetiva frente al manejo de la información laboral y de seguridad social en pensiones, que el asesor no analizó su historia laboral, no le brindó ilustración de las modalidades de pensión que administra el régimen de ahorro individual con solidaridad, no le informó sobre la reglamentación y funcionamiento del fondo de pensiones, si le habló del derecho de retracto, de los requisitos que debía acreditar para obtener una pensión de vejez, entre otros aspectos; y quedó probado que la demandante no tuvo la oportunidad de comprender o entender las implicaciones económicas y jurídicas de su decisión.

La apoderada de PORVENIR S.A. considera que no existían razones fácticas o jurídicas para la declaración de ineficacia, porque la decisión de la accionante se realizó de forma espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley pues, al haber cumplido con el art. 97 del Decreto 663 de 1993 y el formulario cumple con los requisitos del art. 11 del Decreto 692 de 1994; así mismo señala que la sociedad accionada ha hecho campañas masivas para la educación del consumidor financiero y comunicados de prensa informando cambios normativos; que los documentos que acrediten la entrega de información, no era una obligación vigente para el momento del traslado de la parte accionante el cual surgió con la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera; que la obligación del buen consejo, la doble asesoría y desincentivar la afiliación, son obligaciones posteriores que surgieron a partir del año 2010 y 2014; el incumplimiento de la parte accionada del deber de diligencia y cuidado, conlleva a que la misma no pueda ser beneficiaria de su propia culpa o negligencia en su actuar, y ellos queda corroborado con el accionar sistemático y reiterado por la parte demandante, al haber manifestado en el interrogatorio de parte que no realizó comparaciones con otros Fondos Pensionales, no hizo preguntas o indagaciones en el momento de suscripción del formulario y no hizo uso de los diferentes canales de atención al usuario; sostiene que las condiciones del Régimen de Ahorro Individual, no son impuestas sino que se encuentra en la Ley 100 de 1993 por lo tanto, la ignorancia o desconocimiento de esta no sirven de excusa.

Y frente a la devolución a Colpensiones de los valores recibidos con motivo a la afiliación, incluyendo los descuentos de administración, considera que debe ser revocada con base en los argumentos dados anteriormente y la validez de la afiliación, pero en caso de confirmar la ineficacia de la afiliación, se revoque el traslado de los dineros descontados por gastos de administración al estar consagrados en el art. 20 de la Ley 100 de 1993 y dichos descuentos se han cumplido a cabalidad y no se encuentran en el patrimonio de la AFP, y que se atenta contra toda lógica jurídica la declaratoria de un enriquecimiento sin justa causa; que toda decisión judicial de traslado de régimen pensional, debe tener como objetivo constitucional, la estabilidad y sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, y de acuerdo con la coyuntura económica se debe hacer un análisis macro de las consecuencias que se derivan de autorizar solicitudes de traslados que no cuentan con los requisitos para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, como se analizó por el Tribunal Superior de Medellín en sala extraordinaria del 14 de agosto de 2019.

Y resalta el concepto de la Superintendencia Financiera de Colombia del 17 de enero de 2020 Radicación 2019152169-003-000.

Por no aportarse poder o sustitución del poder parte de Dra. Ingris Ruidiaz Soto para representar los intereses de Colpensiones, no se tendrán en cuenta los alegatos allegados al correo institucional.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar en apelación: i) Si hay lugar a declarar la ineficacia del traslado; ii) Si la sociedad PORVENIR S.A. deben trasladar los gastos de administración y seguros previsionales. En consulta se deberá determinar: i) Si hay lugar ordenar el traslado de los gastos de administración y los seguros previsionales debidamente indexados; iii) Si hay lugar adicionar la sentencia ordenándole a PORVENIR S.A. a trasladar el porcentaje de garantía de pensión mínima; y iv) Si hay lugar a la devolución del bono pensional.

Para el caso concreto no existe discusión y está acreditado en el plenario que la demandante no es beneficiaria del régimen de transición por edad, porque a la vigencia de la L 100 de 1993 no tenía más de 35 años de edad al haber nacido el 19 de diciembre de 1961 (fls 11); que cotizó al ISS hoy Colpensiones desde el 2 de diciembre de 1980 al 31 de julio de 1998 (historia laboral de Colpensiones); solicitó traslado a la sociedad PORVENIR S.A. el 11 de octubre de 1997, el cual se hizo efectivo del 1º de octubre de 1998; y no hay discusión que la demandante solicitó la ineficacia del traslado al RAIS, al haber invocado en los hechos de la demanda, la falta de información para poder definir con libertad su traslado.

Descendiendo al caso particular, se tiene que en el INTERROGATORIO DE PARTE absuelto por la accionante, no se evidencia confesión alguna, al haber indicado que el día de la afiliación llegó un asesor diciéndoles que debían de pasarse a PORVENIR S.A. porque el ISS se iba a acabar e iban a perder la pensión de vejez; que en PORVENIR S.A. iban a estar mejor pensionadas, los ahorros iban a ser mayor que en el ISS; que iba a ser el monto de la pensión mayor e iban a salir con cualquier edad que tuvieran; que el asesor no le dijo que iba a pasar con los aportes que tenía en el ISS; que la asesoría fue individual, la cual duró 5 minutos, le pidió los datos de nombre y dirección y el resto lo llenaba con la secretaria administrativa; que ella no conoce los requisitos para pensionarse en los dos regímenes, no le hicieron un comparativo de la pensión en cada uno, nunca recibió una reasesoría; que no ha solicitado pensión de vejez porque nunca le informaron el monto que tenía que tener para pensionarse en PORVENIR S.A., y en este momento no tiene el monto para poderse pensionar y esto lo sabe porque las compañeras que se pasaron les han dicho que deben tener un monto mayor del que tienen ellas en PORVENIR S.A. para pensionarse.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

1. De la ineficacia del traslado

Se tiene que el derecho a la seguridad social es irrenunciable conforme el artículo 48 y 53 de la CP, por ello cualquier pretensión de cambio en las condiciones de este derecho pensional debe ser tomado de manera autónoma y consiente con una comprensión volitiva tal que no quede duda que la información entregada por la entidad para que, con la libertad e información, la persona pueda decidir si se cambia de régimen o no.

Visto lo anterior, debemos revisar que con base en el art. 13 literal b) de la Ley 100 de 1993 que habla de la característica de la seguridad social, y señala allí: *“La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior **es libre y voluntaria** por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley”,* y si nos remitimos al art 271 de la Ley 100 señala que **no será eficaz el traslado** si se menoscaba la libertad, la dignidad humana, los derechos de los trabajadores que son sujetos de protección, y dice que *“Cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado...”* no solo a la multa sino que dice en forma expresa *“... La afiliación respectiva **quedará sin efecto** y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*, o sea que se refiere a una ineficacia.

Desde el **Decreto 720 de 1994**, por el cual se reglamenta el artículo 105 y parcialmente el artículo 287 de la Ley 100 de 1993, en el capítulo relativo a LA RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROMOTORES, en sus artículos 10 y 12 respectivamente reza:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. Cualquier infracción, error u omisión en especial aquellos que **impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados**- en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad **compromete la responsabilidad de la sociedad administradora ...**”. (Resalto fuera del texto)

“OBLIGACIÓN DE LOS PROMOTORES. Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones **deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información** a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.” (Resalto fuera del texto)

Este deber profesional que existe desde 1994, ese de información que permita al usuario tomar una decisión libremente consentida, es decir, **la carga de la prueba correspondería a la entidad demandada**, y que en estos casos corresponde a que se demuestre: cuál fue la información que se le entregó y en qué vastedad se presentó. Tal conceptualización se encuentra en la sentencia SL 12.136-2014, Rad. 46.292 del 3 de Sept. de 2014, M. P. Dra. ELCY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, que reza:

“...A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos pensionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica;...”.

Desde ahí ha existido una línea jurisprudencial, entre otras la de radicado 17.595 de 18 de octubre de 2017, en donde se dice, que la información tiene que ver con: 1º. La antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones del disfrute pensional, 2º. El deber de información concreto y comprensible; y 3º. Que sea de manera prudente, y de manera más específica. Igualmente, la sentencia SL 19.447 de 2017 con radicado 47.125, que indico

que aun operaba la ineficacia del traslado si el afiliado no tiene régimen de transición.

El anterior criterio ha sido reiterado por la CSJ en sentencia SL1421, 1688 y 1689 de 2019, SL4426-2019, y de forma más reciente la sentencia SL 2611, 2877 y 4811 de 2020, y como juez constitucional en las sentencias STL 3716-2020, STL4001-2020 y STL4084-2020, en las cuales se manifestó que los fondos de pensiones son los obligados a dar una información clara, comprensible y suficiente sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea; y que la carga de la prueba sobre el deber de información corresponde a las AFP debiendo probar que dicha información fue realizada, con diligencia, cuidado y buena fe, sin que implique en momento alguno que la sola firma o diligenciamiento del formulario pueda entenderse verdadera información.

La anterior argumentación es aplicable a este caso, pues la entidad accionada PORVENIR S.A., no trajo al plenario ninguna prueba eficaz y relativa a la posible actividad de asesoramiento e información adecuada a la parte actora, cuando tomó la decisión de trasladarse de Colpensiones, sin que les hayan dado una información suficiente y cierta al no haberse demostrado que se le habló de las desventajas del RAIS, ni de los factores cambiantes que inciden al cuantificar la mesada pensional como son la rentabilidad, las cotizaciones y la edad probable de ellas y sus posibles beneficiarios al momento de pensionarse; tampoco sobre la deducción de los gastos de administración, ni de seguros previsionales; no le informaron de la modalidad pensional que debían escoger cuando se fueran a pensionar, ni de la pensión anticipada, ni de la fecha de redención del bono pensional, tampoco hay constancia de la información sobre el capital mínimo que tenía que tener, estando la carga de probar dicha información en cabeza de la accionada ya mencionada, siendo esta la razón por lo que se genera que se haya violentado el **derecho de libertad de selección** del régimen, además de la vulneración del derecho a la dignidad y a la seguridad social de la persona conforme el art 272 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto debe señalarse que la afiliación inicial realizada por la parte actora, no tuvieron efectos, por no existir una libertad informada al momento del traslado o de la afiliación, conforme al artículo 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica que dichos actos son inoponibles, son imprescriptibles y no pueden ser convalidados bajo ningún aspecto, por lo menos hasta que se cumplan los requisitos para el disfrute pensional. Por ello no es suficiente que la sociedad PORVENIR S.A. aporte consulta de viabilidad, formulario de afiliaciones de los años 1997 y 1998, historial de vinculaciones, certificado de vinculación e historia laboral; lo que lleva a concluir que al momento de trasladarse de ISS al RAIS, **no les dieron una información completa y suficiente.**

Conforme a lo señalado, la sentencia de primera instancia deberá ser CONFIRMADA en lo que respecta a la declaración de la ineficacia del traslado, y la orden dada de trasladar a Colpensiones todos los valores que hubiera recibido con motivo de su afiliación como cotizaciones y los rendimientos que se hubieran causados.

2. De los efectos de la ineficacia

- Frente a la devolución de las **cuotas de administración debidamente indexados**, hay lugar a ser trasladadas conforme lo establece las sentencias SL 1688 y 1689 de 2019, y teniendo en cuenta: 1º) En la ineficacia las cosas deben volver al estado en que se encontraban, entendiendo que el aporte pensional debe devolverse completo, sin que pueda admitirse que por haberse

generado rendimientos lo ahorrado o se hubiere hecho pagos posteriores a la cotización, no se debe tener en cuenta el aporte completo, pues las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la afiliación fallida y menos habrá de tenerse consideración alguna para la entidad que aprovechándose de la falta de información fue la que indujo a la afiliación inicial o al mencionado traslado al RAIS, 2º) Porque debe tenerse en cuenta que dichos porcentajes ingresaron y fueron administrados por la AFP accionada durante en el tiempo en que estuvo afiliado la parte demandante en esta, en tanto que la cuota de manejo es administrada directamente por el fondo de pensiones; 3º) Porque la devolución de los gastos de administración es ordenada en la sentencia SL1421 de 2019 y el Fondo de Pensiones debía devolver *“los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales”*; y 4) Porque si bien es cierto que el art. 20 de la Ley 100 de 1993 determina el porcentaje que se destina a financiar los gastos de administración, no se puede pasar por alto que se está bajo la figura de la ineficacia, la cual deja sin efectos jurídicos las actuaciones realizadas, lo que genera que todo lo cotizado a la AFP deba trasladarse a Colpensiones, y aunado a lo anterior, es a esta última entidad a la que le corresponde determinar el porcentaje que va a destinar a dicho rubro, por ende la Administradoras Privadas no puede librarse de su devolución por estar consagrado en dicho artículo.

- **Las sumas adicionales de la aseguradora** hay lugar a devolverlas **debidamente indexada**, porque la CSJ SL17595-2017 y CSJSL4989-2018, donde se rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989 se dijo: *“La administradora tiene el deber de devolver al sistema ..., sumas adicionales de la aseguradora,.”*

Como consecuencia de lo anterior, se ADICIONARÁ la sentencia, en el sentido de ORDENARLE a las sociedades PORVENIR S.A. a realizar la devolución de las cuotas de administración y las sumas adicionales debidamente indexados.

- Frente al **porcentaje de garantía de pensión mínima**, considera la Sala que **debe ser devuelto** a Colpensiones, teniendo en cuenta que dichos porcentajes ingresaron directamente a las sociedades PORVENIR S.A., a la luz de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016, es por lo que se ADICIONARÁ la sentencia, ORDENÁNDOLE a la sociedad PORVENIR S.A. a devolver a Colpensiones el porcentaje de garantía de pensión mínima.

3. De la devolución del bono pensional

En lo que respecta a la orden dada a PORVENIR S.A. de devolver el bono pensional, se debe tener en cuenta que, previo al pago del bono pensional, existen unas etapas que se deben de generar, tal y como son: la emisión, expedición y finalmente la redención, siendo necesario precisar en este caso que, si bien es cierto que la redención normal del mismo sería a los 60 años, ellos es, para el **19 de diciembre de 2020** al haber nacido el 19 de diciembre de 1960, no existe prueba en el plenario de la emisión y redención del bono pensional. Y aunado a lo anterior, en el hipotético caso que se hubiere realizado la redención anticipadamente (de lo cual no hay prueba), debe anularse y devolverse a la oficina de bonos pensionales, para realizar el trámite al que haya lugar.

Con fundamento en lo anterior, la orden en mención se REVOCARÁ, para en su lugar indicar que en caso de que el bono pensional haya sido recibido anticipadamente, se proceda a restituirlo a la oficina de bonos pensionales del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, para que esta entidad proceda con su anulación.

Costas en esta instancia a cargo de la sociedad PORVENIR S.A. en la suma de \$908.526 por no haber salido avante el recurso de apelación interpuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: ADICIONAR la sentencia de primera instancia, en el sentido de **ORDENARLE** a la sociedad PORVENIR S.A. a la devolución de los gastos de administración y seguros previsionales debidamente indexados, de conformidad con lo analizado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia, en el sentido de **ORDENARLE** a PORVENIR S.A. a devolver a Colpensiones el porcentaje de garantía de pensión mínima.

TERCERO: REVOCAR la orden de devolver el bono pensional, para que, en su lugar, en caso que haya sido recibido anticipadamente, se proceda a restituirlo a la oficina de bonos pensionales del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, para que esta entidad proceda con su anulación.

CUARTO: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia emitida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO: Costas en esta instancia a cargo de la sociedad PORVENIR S.A. en la suma de \$908.526.

Las anteriores decisiones se notifican en ESTADOS

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTANO CARDONA

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
- SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 013 del 28 de enero de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>